



Imprimir

Cerr

Informante de la DEA teme ser deportado

Reveló las narcofosas y produjo el arresto de un lugarteniente narco; ahora corre peligro

Claudia Núñez / Enviada especial | 2009-01-12 | La Opinión

Primera parte

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.— Aparecieron sepultados en bolsas de plástico, con el cráneo aplastado y el cuerpo mutilados. Doce crímenes presenciados y auspiciados por Guillermo Ramírez Peyró, un ex policía de caminos mexicano que actuó como agente infiltrado de Estados Unidos en el cartel de Juárez.

Pero ahora Ramírez Peyró espera en una cárcel de Estados Unidos su posible deportación, una decisión que podría efectuarse este año.

Según Jodie Goodwin, abogada del ex informante, con la deportación de Ramírez Peyró, el gobierno de este país estaría buscando deshacerse de una bomba que podría sacar a la luz pública la profunda corrupción existente en las corporaciones federales.

Y es que por años, Ramírez Peyró, también conocido como "Lalo", informó a la propia Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina Federal contra el Narcotráfico (DEA), organismos a los que servía, de una serie de asesinatos cometidos en Juárez por el cartel. Sin embargo, ambos organismos optaron por guardar silencio antes de contactar al gobierno mexicano sobre estos hechos.

"Pudieron evitarse muchas muertes, pero vergonzosamente estamos inundados de corrupción", declaró a La Opinión Sandalio González, ex jefe de la DEA en El Paso durante los años en que ocurrieron los hechos.

Conocida como "la casa de los entierros", el caso se convirtió en la primera de las narcofosas descubierta en Juárez. Una docena de cadáveres que en la segunda semana de enero de 2003 salieron a la luz, y cuyas historias aún hoy se discuten en la corte de este país frente a la denuncia de quienes afirman que EEUU tuvo el poder de detener la matanza y optó por el silencio.

Tras las rejas

Pocos tienen contacto con él. De sus 38 años, lleva cinco oculto en cárceles de máxima seguridad. Así es de momento la vida de "Lalo", un agente de la Policía de Caminos en México que en 1995 se pasó a las filas del narco.

Protegido por su placa de oficial cruzó la frontera entre México y EU sirviendo como traficante de drogas para el cartel de Juárez.

En 2003 las autoridades de ICE y la DEA lo detuvieron con un cargamento de marihuana. Al poco tiempo, le pusieron una oferta sobre la mesa: 220 mil dólares, su libertad y protección —según consta en documentos oficiales— a cambio de convertirse en un agente infiltrado en la organización de Vicente Carrillo Fuentes y Heriberto Santillán Tabares, lugarteniente este último del cartel de Juárez.

El 15 de enero de 2004 en su calidad de infiltrado, Lalo convenció a Santillán de que lo acompañara a Estados Unidos, donde de inmediato las autoridades federales lo detuvieron.

Pero llegar a este punto significó al menos 12 muertes, todas presenciadas por Lalo. Después de cada crimen, el informante cruzaba a El Paso y con videos mostraba a las autoridades de EEUU los asesinatos contra menudos traficantes, abogados y familiares de enemigos del cartel.

"Es vergonzoso que las autoridades no hicieran nada para evitar más muertes. Cuando Lalo les presentó los primeros videos, ICE y la DEA simplemente le dijeron que siguiera en el caso, que ya no grabara imágenes, sólo voces, pero jamás dieron aviso a las autoridades mexicanas de estos hechos. De haber actuado, la vida de muchas personas tal vez se hubieran salvado", comentó Sandalio González, ex jefe de la DEA en El Paso, en entrevista con La Opinión.

Celia Toro, investigadora del Colegio de México, calificó estos hechos como "una deslealtad brutal", al no

acatar la ley y los acuerdos de intercambio de información entre México y EU.

'Era mi deber'

Denunciar la corrupción y el silencio del gobierno norteamericano ante los asesinatos ocurridos en "la casa de los entierros" y otras narcofosas le costó a Sandalio González su posición como jefe de la DEA en El Paso, Texas.

"Yo sabía que después de criticar lo que estaban haciendo, si no dejaba mi puesto me iban a plantar algo para meterme a la cárcel o me iban a matar... Mejor decidí dejarlo todo", comentó González a La Opinión. También ex oficial del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Sandalio aseveró que tras conocer la serie de crímenes y la participación de un agente federal de EU infiltrado, denunció los hechos en una carta enviada al entonces procurador de San Antonio Johnny Sutton y a su colega en El Paso Juanita Fielden.

De acuerdo a González ambos funcionarios ignoraron la misiva, provocando que más muertes continuaran surgiendo en Juárez.

"Este caso es un hecho vergonzoso y el gobierno no está interesado en investigarlo, Hay mucho en juego en esta historia", dijo González.

Declaraciones rendidas bajo juramento narran que Lalo informó que agentes de la DEA, así como funcionarios mexicanos, estaban estrechamente relacionados con el cartel de Juárez.

También vinculó a funcionarios de la presidencia de Vicente Fox con el cartel de Juárez, ya que, según Lalo, se comprometieron algunos de sus asesores a combatir el cartel de Tijuana para darle paso libre a la organización de Juárez.

El gobierno mexicano negó las acusaciones, en tanto que el de Estados Unidos y las oficinas de Sutton y Fielden declararon que ellos no estaban al tanto de la serie de asesinatos que se estaban cometiendo.

"Obviamente el gobierno está plagado de corrupción y este caso es uno de los más sucios", declaró en entrevista el ex jefe de la DEA.

'Carnes asadas'

Según declaraciones del ex policía de caminos ante el juez Joseph R. Dierkes, durante su testimonio el 11 de agosto de 2005, a la voz de su jefe Santillán, Lalo organizaba las llamadas "carnes asadas" código del narco para celebrar ejecuciones de los indeseables del cartel.

"Cada vez que me hablaba [Santillán] para avisarme que iba a haber una 'carne asada' yo le informaba a ICE. Y cada vez, después de supervisar que se terminaran los entierros me iba a las oficinas de ICE en El Paso para entregar las grabaciones de los asesinatos".

Para ganarse la confianza plena del cartel, Lalo controlaba el acceso a la casa donde se cometían los crímenes, compraba el material para los entierros, cal, bolsas y citaba a las futuras víctimas.

El infiltrado también testificó que se usaron varias casas para cometer los asesinatos y que otros cuerpos fueron simplemente lanzados a la vía pública.

Por su colaboración con las autoridades y el peligro que corre su vida si regresa a México, en agosto de 2005, el juez Joseph Dierkes, concedió a Ramírez la protección de la Convención contra Torturas. Sin embargo, ese mismo año el gobierno de Estados Unidos apeló la decisión.

El caso, ahora en la corte de apelaciones podría llegar a su fin este mismo año, según informó la abogada.

"El gobierno de este país está actuando mal, pero tenemos confianza en los argumentos que hemos presentado. Iremos hasta la Suprema Corte, si le niegan resguardo", detalló Goodwin.

Ramírez permanece como testigo protegido en una prisión de máxima seguridad de la zona central del país. Fuera de ella su vida está en peligro.

Imprimir

Gen

OPINIÓN

CANALES

Autos

Clasificados

Deportes

Diversión

Educación

Entretenimiento

Negocios-Finanzas

Inmigración

Móvil

Noticia

Salud

Teleguía

Vida y Estilo

Voto Latino

PUBLICACIONES

La Opinión

El Diario

Hoy NY

La Raza

El Mensajero

La Prensa

Vista

La Vibra

Contigo

Rumbo

Advertise

Contáctanos

Privacidad

Términos de uso

Índice del sitio